

te de la crítica de querer retirar a generales por motivos políticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en varias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Estado. Esto había sido personalmente conversado por el presidente Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».

Y la Marina

El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos navales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como comandante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le tenían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allende se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar.

¿Cuántos otros oficiales fueron arrestados o asesinados por quienes hoy imponen su sangrienta traición en Chile?».

Ese 31 de agosto, también, los organismos civiles al servicio de los generales golpistas habían avanzado un paso más en la conspiración. El Colegio de Abogados, «a petición de diversos colegiados», había preparado un informe «jurídico» sobre si debía «pedir al Congreso Nacional que declarara la inhabilidad constitucional del Presidente de la República». El Colegio de abogados decía, en ese informe, que sí se podía. Y se hacía la siguiente reflexión, por cuenta de los propios generales:

«Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar determinada por una de dos causas posibles. El Presidente voluntaria y conscientemente, y con propósitos no confesados, se ha propuesto violar sistemáticamente las bases fundamentales de nuestro sistema institucional, o bien el Excelentísimo señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo».

En ambas alternativas se «justificaba» aparentemente la destrucción de la democracia burguesa chilena por parte del aparato militar de la burguesía, y su reemplazo por un sistema más seguro: el fascismo.

Los últimos días

El diario «El Mercurio» reflejaba ya el 31 de agosto la situación nacional. En su primera página, traía una noticia procedente de Valparaíso que decía así:

«Con la firma del juez naval, vicealmirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, se presentó la petición de desafuero contra el senador socialista, Carlos Altamirano, y del diputado mapucista, Óscar Garretón.

»La petición de desafuero se fundamenta en el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marineros que intentaron apoderarse de dos buques de la Armada para desencadenar una guerra civil».¹⁵

Ya había 20 provincias, de las 25 que tiene Chile, en que los dueños de camiones y colegios profesionales manejados por demócratacristianos y nacionales estaban en huelga.

También en primera página, con ilustración fotográfica del general en retiro en uniforme. «El Mercurio» informaba:

«El próximo martes viajará a Paraguay el general (R) Ro-

